

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JURISDICCIONAL DEL PODER PÚBLICO**



“Al servicio de la justicia y de la paz social”

**TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN
SALA DE DECISIÓN CIVIL**

PROCESO	VERBAL –IMPUGNACIÓN ACTA DE ASAMBLEA-
DEMANDANTE	GUILLERMO ROMERO AGUDELO Y OTROS
DEMANDADA	CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA
INSTANCIA	SEGUNDA –APELACIÓN DE AUTO-
PROCEDENCIA	JUZGADO DÉCIMO CIVIL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN
RADICADO	05001 31 03 010 2021 00114 01 INTERNO 2021-161
PROVIDENCIA	AUTO INTERLOCUTORIO N° 0149
TEMAS	MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO
DECISIÓN	REVOCA
MAGISTRADA PONENTE	MARTHA CECILIA OSPINA PATIÑO

Medellín, trece (13) de diciembre de dos mil veintiuno (2021)

Procede el Tribunal a decidir el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandada frente a la decisión proferida por el Juzgado de primer grado en providencia del 28 de junio de 2021, mediante la cual admitió la demanda y se decretó la medida cautelar de suspensión del acto impugnado.

I. ANTECEDENTES

Los señores Guillermo Romero Agudelo, Braulio José Martínez Mayorga, Ana María Montoya Sánchez y Nohora Robles Miranda formularon demanda con pretensión de impugnación de actas de asamblea en contra de Confiar Cooperativa Financiera.

Desde la misma demanda solicitó la parte demandante la suspensión provisional del punto 11, tratado en la reunión de la asamblea ordinaria de delegados de CONFIAR, del 13 de marzo de 2021, relacionado a la propuesta de la reforma de los estatutos.

Mediante providencia del 28 de junio del año en curso, se admitió la demanda y, en la misma providencia se decretó la cautela pedida.

II. LA IMPUGNACIÓN

Frente al anterior proveído el apoderado de la parte demandada formuló recurso de apelación aduciendo que de acuerdo con el orden del día aprobado por la Asamblea General Ordinaria de Delegados de Confiar Cooperativa Financiera, en el punto 11 de Reforma al Estatuto, se presentó para discusión y aprobación en la Asamblea la reforma de Estatutos, con ocasión de un requerimiento efectuado por la Superintendencia Financiera, entidad que tiene la función de supervisión de la demandada; que la asamblea acogió la instrucción impartida, la cual se encuentra de acuerdo con la ley; que con ocasión de lo anterior la Superintendencia Financiera de Colombia cerró el trámite que había iniciado contra esa Cooperativa, lo cual informó en oficio 2021072989-009-000 donde expuso: *“(...) frente a la reforma realizada se encuentra que la entidad atendió lo requerido por esta Superintendencia bajo radicado 2020183974-000-000, dando lugar a que se ajustaran los artículos 68 “Número de integrantes y período del Consejo de Administración”, 77 “Funciones del Representante Legal” y 107 “Créditos a Directivos(as), Administradores y familiares”, sin que se evidencie contradicción con los preceptos legales que rigen la materia. Por lo cual, se da por concluido el presente trámite sin observaciones”*.

Que la otra propuesta de reforma presentada por un Grupo de Delegados y Asociados, fue llevada al Consejo de Administración quien en uso de sus facultades emitió concepto negativo; que dicha propuesta también fue presentada a los Delegados en las Preasambleas, en las que además estuvieron representados e intervinieron los proponentes y estuvo a disposición en el sitio <https://escuela.confiar.coop/course/view.php?id=271>; que sometida a consideración de la asamblea, fue rechazada, porque se optó por acoger el concepto negativo del Consejo de Administración.

Que la medida cautelar decretada, no se relaciona en su contenido y efectos con lo que pretende la parte demandante, porque va dirigida a la aprobación de la propuesta presentada por la administración derivada de un requerimiento de la Superintendencia Financiera, que nada tiene que ver con la propuesta presentada por un grupo de delegados y asociados; además, con la suspensión se coloca a la demandada en una clara situación de incumplimiento legal.

Mediante providencia del 23 de julio de los corrientes el Juzgado de primera instancia concedió la alzada y el asunto arribó a esta Corporación siendo repartido a conocimiento del despacho el 3 de agosto de 2021, donde se procede a decidir de plano el recurso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 326 del Código General del Proceso.

III. CONSIDERACIONES

1. MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO.

Desde el anterior estatuto procesal civil estaba establecida en nuestro ordenamiento la medida cautelar especial de suspensión del acto impugnado, que puede ser solicitada en los procesos con pretensión de impugnación de actas de asamblea. En dicho estatuto procesal estaba consagrada en el artículo 421 inciso 2, el que instituía: *“En la demanda podrá pedirse la suspensión del acto impugnado; el juez la decretará si la considera necesaria para evitar perjuicios graves y el demandante presta caución en la cuantía que aquel señale”*.

La norma anterior establecía entonces dos requisitos necesarios para que pudiera decretarse la medida de suspensión del acto impugnado; esto es, que la misma fuera *necesaria para evitar perjuicios graves* y que el demandante prestara *caución* en la suma establecida por el Juez. Sin embargo, la doctrina nacional¹ desarrolló un requisito adicional, consistente en que el acto impugnado o las decisiones de cuya suspensión se trata, sean al menos aparentemente ilegales, esto es, contrario a los estatutos o a la ley.

Esa posición doctrinal tenía pleno respaldo en el art. 191 del C. de Co, cuando advierte que *“Los administradores, los revisores fiscales y los socios ausentes o disidentes podrán impugnar las decisiones de la asamblea o de la junta de socios cuando no se ajusten a las prescripciones legales o a los estatutos”* (subrayado fuera de texto).

En el actual estatuto procesal civil –Código General del Proceso – también se estableció la posibilidad de solicitar como medida cautelar previa, en los

¹ Véase por ejemplo Hernán Fabio López Blanco, Procedimiento Civil, Tomo 2 especial, Novena Edición, Editores DUPRE, 2009, pag. 170.

procesos con pretensión de impugnación de actas de asamblea o juntas de socios, la suspensión del acto impugnado, con la particular modificación que, el requisito que antes tenía sólo desarrollo doctrinal y relativo a la aparente ilegalidad el acto impugnado o las decisiones de cuya suspensión se trata, fue plasmado de forma expresa en la nueva normativa; así entonces, el artículo 382 del Código General del Proceso establece en lo pertinente:

En la demanda podrá pedirse la suspensión provisional de los efectos del acto impugnado por violación de las disposiciones invocadas por el solicitante, **cuando tal violación surja del análisis del acto demandado, su confrontación con las normas, el reglamento o los estatutos respectivos invocados como violados, o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud.** El demandante prestará caución en la cuantía que el juez señale (Resaltado intencional).

2. CASO CONCRETO.

La censura de la parte recurrente se cimienta en cuestionar la decisión mediante la cual el Juzgado de primer grado decretó la medida cautelar de suspensión provisional del punto 11 tratado en la reunión de la asamblea ordinaria de delegados de CONFIAR del 13 de marzo de 2021, providencia que, de conformidad con lo establecido en el artículo 321 numeral 8 del C.G.P., es susceptible de recurso de apelación.

Lo primero que se advierte en este caso es que la providencia de primera instancia que decretó la suspensión carece absolutamente de motivación alguna sobre la procedencia de la medida de cara al requisito de violación de las normas, reglamentos o estatutos. Véase que el a quo, para decretar la medida se limitó a indicar que en esta clase de procesos es posible pedir la suspensión provisional del acto impugnado y que no había lugar a prestar caución por tratarse de un asunto no relacionado con pretensiones económicas, dejando de lado por completo el análisis de la contrariedad de la decisión que se pretende suspender con las normas que rigen el actuar de la entidad demandada, requisito que precisamente es la base de una decisión de este talante.

Estudiada la demanda y los argumentos de la parte recurrente, evidencia este despacho que en el caso concreto la cautela pedida no cumple con el requisito esencial ya estudiado relativo a la evidente contradicción de lo

decidido con las prescripciones legales o estatutarias; en primera medida, porque la parte demandante no expone en qué norma estatutaria estaba establecida la obligación de poner en conocimiento, adicional a la publicación que en la página web de la demandada se hizo, la propuesta de reforma al estatuto, la parte demandante entre otras normas generales sobre la descripción del máximo órgano de gobierno y las decisiones que éste adopta, cita el artículo 115 de los estatutos, el cual regula el trámite de la reforma estatutaria, mismo que dispone que *“Cuando tal reforma sea propuesta por los(as) Asociados(as), debe ser enviada al Consejo de Administración a más tardar el último día de diciembre de cada año, para que este Organismo la analice detenidamente y la haga conocer en la Asamblea General de Delegados con su concepto respectivo”* y, en este caso, en la misma demanda se afirmó que la propuesta fue enviada al Consejo de Administración pero obtuvo concepto desfavorable. Se duele de forma insistente la demandante del hecho de que en la asamblea no se hubiese puesto en conocimiento el texto de la propuesta de reforma, pero allí sí se puso de presente la propuesta, el concepto desfavorable y se explicó que fueron publicados con antelación en la página web de Escuela Confiar, lo que de entrada no se evidencia como palmariamente contradictorio de la norma estatutaria referida que implique la suspensión de forma previa al trámite del proceso, máxime cuando en la citación a la asamblea se puso de presente de forma expresa que los invitados debían consultar en el aula virtual de la Escuela Confiar los documentos que se tendrían en cuenta en dicha asamblea, expresamente se indicó *“Lo invitamos a consultar permanentemente el Aula Virtual de la Escuela Confiar donde podrá encontrar la documentación a ser considerada en la Asamblea General Ordinaria”* (Fl. 18 contestación demanda).

En segundo lugar, el argumento y material probatorio puesto de presente por la parte demandada con ocasión de este recurso, da cuenta que la reforma aprobada surgió de un requerimiento de ajuste de los estatutos realizado por la Superintendencia Financiera, trámite que fuera cerrado luego de la reforma, lo que da luces para entender que en principio, no existe

contradicción entre lo aprobado y que se pretende suspender, con la normativa que regula a la entidad demandada.

Puestas así las cosas la ilegalidad aducida no resulta palmaria como lo exige la norma para la viabilidad del decreto de la cautela. Es que la norma establece que la medida es procedente cuando la violación *“surja del análisis del acto demandado, su confrontación con las normas, el reglamento o los estatutos respectivos invocados como violados, o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud”*, lo que significa que para acceder a la suspensión lo determinante, es la ilegalidad aparente, misma que no se constata pues no se observa de entrada una contradicción a la norma citada por la parte demandante.

Sobre este particular resulta procedente traer a colación lo indicado por la doctrina sobre el entendimiento de dicha norma; así, Hernán Fabio López Blanco², explica:

En efecto, no basta solicitar la suspensión provisional del acto impugnado para que se señale la caución y fatalmente proceda, una vez prestada ésta, a ordenar la suspensión porque el sentido de la decisión de la cautela no depende tan sólo de que se preste caución; en absoluto, el juez debe analizar si la decisión es aparentemente ilegal por ser el acto, en principio, violatorio de la ley, porque, lo reitero la cautela no está montada sobre la base objetiva de que lo pida el demandante y se preste caución.

Puestas así las cosas, es evidente que no se cumplían en este caso los requisitos para el decreto de la cautela reclamada, por lo que se revocará la providencia de primer grado que sin fundamentación alguna la decretó.

IV. COLOFÓN Y COSTAS.

En suma, se revocará la decisión objeto de alza y dada la prosperidad de la alza no se impondrá condena en costas.

² Código General del Proceso. Parte Especial. Dupre Editores. Bogotá, 2017. Pag. 181.

Por lo expuesto, la suscrita Magistrada Sustanciadora de la Sala Civil del Tribunal Superior de Medellín,

V. RESUELVE

PRIMERO. REVOCAR el NUMERAL 6 del auto proferido el 28 de junio de 2021 por el Juzgado Décimo Civil del Circuito de Medellín y, en su lugar **DENEGAR** el decreto de la medida cautelar de suspensión de la decisión impugnada.

SEGUNDO. ABSTENERSE de imponer condena en costas.

NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE

MARTHA CECILIA OSPINA PATIÑO

Magistrada

(Firma electrónica conforme al artículo 11 del Decreto 491 de 2020 del Ministerio de Justicia y del Derecho)

Firmado Por:

**Martha Cecilia Ospina Patiño
Magistrado Tribunal O Consejo Seccional
Sala 007 Civil
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

df28c95d30eaff4aa53d0e2de9f5a90734f5ab2587a993a240496ffc273a5d3f

Documento generado en 13/12/2021 08:28:31 AM

Valide este documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>